

**Auto No:** AI 035  
**Proceso:** Ejecutivo  
**Demandante:** Sociedad Iscol Investments S.A.S  
**Demandado:** Héctor Mario Otoya Delgado  
**Radicado:** 05001 31 03 003 2022 00387 01  
**Asunto:** Revoca auto apelado, ausencia de motivación.

**TRIBUNAL SUPERIOR  
DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN  
-SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL-**

Medellín, dieciséis (16) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Concita la atención de la Sala desatar el recurso de apelación formulado por la parte demandante en contra del auto fechado el día diecisiete (17) de noviembre del dos mil veintidós (2022), proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medellín, dentro del trámite del proceso Ejecutivo incoado por el apoderado judicial de Sociedad Iscol Investments S.A.S, en contra del señor Héctor Mario Otoya Delgado, mediante el cual se denegó el mandamiento de pago pretendido por la demandante.

**I. ANTECEDENTES**

**1. Supuestos fácticos vinculados al presente caso.** Como hechos relevantes con miras a desatar la alzada, se tiene que, la Sociedad Iscol Investments S.A.S prestó un servicio de suministro y procesamiento de frutas al señor Héctor Mario Otoya Delgado desde el día 21 de septiembre del 2021 hasta el 12 de octubre del 2021, y posteriormente del 13 de esa mensualidad hasta el 20 de octubre del año en cita. Para respaldar las obligaciones con ocasión de los anteriores servicios, se diligenciaron los pagarés con carta de instrucciones nominados No 021 y 039, en donde se autorizó llenar los espacios en blanco para el caso de incumplimiento en el pago de las obligaciones adeudadas y asimismo se estableció como fechas de vencimiento los días 29 de septiembre de 2021 y 22 de octubre del 2021 respectivamente.

Al finalizar la prestación de los servicios de suministro y procesamiento de frutas, el señor Héctor Mario no pagó los servicios prestados, adeudando la

suma de \$147.000.000 en razón del pagaré nominado No 021 y el valor de \$84.294.409, correspondiente al título No 039, adeudando en total una suma equivalente a \$231.924.409.

Refiere que, por concepto de intereses moratorios del pagaré No 021, se le adeuda la suma de \$37.044.000 tasados desde el 22 de noviembre del 2021 hasta el 22 de septiembre del 2022 y, en el caso del pagaré No 039, por ese mismo concepto se le adeuda la suma de \$21.400.951, estimados desde el 29 de octubre del 2021 hasta el 29 de septiembre del 2022, por lo que, al sumar ambas cifras, en su totalidad el demandado adeuda por intereses moratorios la suma de \$58.444.951.

Igualmente, advierte que, como en la cláusula segunda de los mencionados pagarés se estipuló que sería a cargo del deudor todos los gastos e impuestos que se causen o se generen incluyendo los honorarios del abogado que a nombre del acreedor promueva la demanda judicial y, en tal sentido, solicitó que se librara mandamiento de pago por la suma de \$22.050.000, por gastos de honorarios sobre el pagaré con carta de instrucciones 021 y \$12.738.661, correspondientes al instrumento cambiario No 029, para un total de \$34.788.661, como emolumento correspondiente a los honorarios del abogado.

**1.1.** Previo a surtir la etapa preliminar de admisión, el Juez en auto del primero (1) de noviembre del dos mil veintidós (2022), inadmitió la demanda, para que la demandante explicara las razones del porqué es exigible el cobro del concepto de los honorarios de los abogados, o, si existe norma que supla el vacío dejado en los pagarés, por cuanto en los documentos de crédito no se pactó tal emolumento como servicios profesionales. Asimismo, solicitó que se aportara al despacho en original los títulos valores objeto de instrucciones, de conformidad con el artículo 422 y 430 del C.G.P.

**1.2.** Dentro del término oportuno la apoderada de la parte demandante precisó que el nexo jurídico yace en las disposiciones establecidas contractualmente y legalmente establecidas en los documentos allegados al plenario, como quiera que bajo la autonomía de la voluntad privada, el señor Héctor Mario Otoyá suscribió esos documentos cartulares, amparados bajo los

artículos 709 y siguientes del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 622, por lo que, como en este caso, sí son esas obligaciones ejecutables como quiera que el demandado aceptó que: i) serán a su cargo los gastos del cobro, pago ejecución del pagaré; ii) gastos y honorarios profesionales de recaudo de dicho título; iii) gastos de cobranza judicial por el incumplimiento; iv) dentro de los gastos de cobranza se nombra explícitamente honorarios de abogado que promueva la demanda judicial, lo que permite su exigibilidad, conforme a los requisitos de los títulos valores, estos es, claridad y expresividad.

Igualmente, aclaró, en caso de que no se compartiera los argumentos que expuso para la prosperidad de librar el mandamiento de pago, fue por lo que adecuó las pretensiones respecto de los valores acordados por concepto de honorarios de abogados, en el sentido que se liquiden como agencias en derecho. De otro lado, frente al segundo requisito de acompañar los títulos en original, indicó que aquellos se encuentran en poder de la parte pasiva, por lo que solicitó que ese documento fuera acompañado durante el traslado de la demanda, de acuerdo a lo previsto en el artículo 167 del C.G.P.

**2. Del auto impugnado.** El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, en providencia del diecisiete (17) de noviembre del 2022, rechazó el mandamiento de pago, bajo el argumento que no se subsanaron los defectos indicados en la demanda dentro del término otorgado.

**3. De la alzada.** En la oportunidad procesal pertinente, la apoderada de la demandante interpuso recurso de apelación, advirtiendo que el A quo no atendió a los requisitos propios del artículo 42 del C.G.P del proceso, porque no motivó su providencia y, en este caso, sólo se limitó a señalar el sustento normativo, sin esgrimir razones del porqué resultaba procedente su rechazo, pues desconoce las causales que se incumplieron en el escrito de subsanación.

Esbozados así los motivos de disenso de la parte demandante, los cuales dieron lugar a la decisión apelada, procede la Sala Unitaria Civil de decisión a decidir el recurso impetrado con fundamento en las siguientes,

### III. CONSIDERACIONES

1. Sea lo primero indicar, que el legislador, al codificar nuestro Código General del Proceso, tuvo en cuenta una serie de exigencias dirigidas a que no se generase un desgaste innecesario del aparato judicial (derroche de jurisdicción), pretendiendo garantizar el éxito del proceso, para que no se produzcan fallos inicuos, esto es, contrarios a la equidad y la justicia, ni que la presentación de la demanda *per se*, no defina la Litis que involucre la controversia.

Es así como, si la demanda cumple con las exigencias establecidas en el estatuto procesal, habrá de ser admitida (o librarse mandamiento de pago en la forma legal si se trata de proceso ejecutivo), pues, de lo contrario, tendrá que rechazarse, sin embargo, el mismo estatuto procesal contempla la figura de la inadmisión, oportunidad procesal en la que el juez indica al demandante las fallas que presenta la demanda, para que, en el término de cinco (5) días, este subsane los defectos de que ella adolezca, defectos que han sido definidos taxativamente por el legislador y que, en todo caso, se encuentran establecidos en el artículo 90 del Código General del Proceso.

**2. Caso en concreto.** Tomando como punto de apoyo que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medellín denegó el mandamiento de pago y que el demandante interpuso el recurso de apelación, se tiene que, en lo atinente a la apelación de dicho auto, en primera medida, es procedente dicho recurso de alzada, toda vez que el Código General del Proceso en su artículo 321 consagra dentro de los autos apelables aquel que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago y los que rechacen de plano las excepciones de mérito en el proceso ejecutivo, son susceptibles de apelación.

Conforme a lo expuesto en los acápites que preceden, ciertamente resulta evidente la revocatoria del presente proveído, porque aunque se desconozca a ciencia cierta las razones por las que el juez cognoscente denegó la orden de apremio, lo cierto es que luego de realizarse una interpretación sistemática del escrito de la demanda y de los requisitos de inadmisión previstos

en el auto del 1 de noviembre del 2022, se logra extraer que la revocatoria del auto no solamente debe darse por la ausencia de justificación al no exponer razonadamente los móviles del rechazo del mandamiento de pago, sino también, porque pasó por alto pronunciarse en el auto que negó el mandamiento de pago sobre las verdaderas pretensiones principales signadas en los pagarés, esto es, las sumas descritas por el ejecutante relacionadas con los servicios de suministro y procesamiento de frutas que brindó al demandante y los intereses que se causaron, incumpliendo así con las pautas descritas en el artículo 430 del C.G.P., en cuanto que: “Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.”

**2.2.** En ese orden de ideas, no se halla justificación alguna del por qué el juez a quo restó importancia a las normas que preceden, omitiendo el deber de pronunciarse de fondo sobre la admisibilidad del mandamiento de pago en relación con las verdaderas pretensiones principales, para desprenderse del conocimiento del proceso, conducta que desconoce el deber previsto en el numeral 7 del artículo 42 del C.G.P. *“Motivar la sentencia y las demás providencias”* porque, el imperativo de motivar las determinaciones judiciales no se cumple, sin más, con la simple y llana expresión de lo decidido por el funcionario judicial, en cuanto es preciso que manifieste en forma clara, expresa e, indudable su argumentación, con soporte en los preceptos aplicados en cada asunto, explicando sus razones jurídicas respecto del plexo normativo aplicable al caso.

Así las cosas, asistiéndole la razón al recurrente en su escrito de alzada, cuando argumenta que desconoce las razones por las cuales el Operador Judicial se abstuvo de librar el mandamiento de pago, resulta procedente ordenar la revocatoria de la decisión adoptada en auto calendado del diecisiete (17) de noviembre del 2022 y, en tal sentido, se insta al juez de conocimiento para que estudie nuevamente el proceso y adopte una decisión frente al mandamiento de pago respecto de las pretensiones principales y accesorias en la forma que crea legal hacerlo, o que lo niegue con las razones jurídicas que considere pertinentes y así garantizar el principio de doble instancia, ya que el apelante no pudo pronunciarse sobre el rechazo del

mandamiento de pago respecto de las pretensiones principales cuyos argumentos se desconocen, sino que también pueden surgir nuevas inquietudes de inadmisión o de rechazo, mismas que las partes tendrían el derecho de recurrir si fuere el caso. Además, no puede ahora el tribunal pronunciarse sobre el rechazo de la demanda que se presentó solamente sobre las pretensiones accesorias, porque sería un contrasentido que se admita una demanda solamente por ellas, cuando debe primero prosperar la admisión sobre las pretensiones principales, ya que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, por lo que sería un desatino que se admitiera la demanda solamente sobre el costo de agencias en derecho, cuando primeramente debe prosperar o fracasar la admisión de las pretensiones principales signadas en los pagarés, sobre lo cual el juez aún no se ha pronunciado.

Sin más consideraciones, el ***Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Unitaria de Decisión Civil,***

#### IV. RESUELVE:

**PRIMERO:** REVOCAR el auto con fecha del diecisiete (17) de noviembre del 2022, por medio del cual se denegó el mandamiento de pago y, en tal sentido, se insta al juez de conocimiento para que estudie nuevamente el proceso y adopte una decisión frente al mandamiento de pago en la forma que crea legal hacerlo, ya admitiendo la demanda sobre las pretensiones principales y accesorias, o negando ambas, o admitiendo solamente las pretensiones principales, para así garantizar el principio de doble instancia, ya que no sólo se desconocen las razones para negar dicho mandamiento frente a las pretensiones principales, sino que también pueden surgir nuevas inquietudes de inadmisión o de rechazo, mismas que las partes tendrían el derecho de recurrir si fuere el caso.

**SEGUNDO:** Devolver el expediente al Juzgado de origen para que continúe con el trámite del asunto.

**NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE,**

**JULIÁN VALENCIA CASTAÑO  
MAGISTRADO**

**Firmado Por:**

**Julian Valencia Castaño**

**Magistrado Tribunal O Consejo Seccional**

**Sala 010 Civil**

**Tribunal Superior De Medellín - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **946287916ed6806ba86bb64712a0abc10e850f21c57ac97016a1a3b3cb9f61fb**

Documento generado en 17/05/2023 08:37:57 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**